a su vez, informa que la sentencia de 31 de mayo de 1911 estriba en un error irrectificable en via judicial, pero que las Cortes, en el ejercicio de su soberanía, pueden y deben en la forma legal que proceda, subsanar, pues, a su juicio, el artículo 4.º de la ley de 15 de junio de 1882, al derogar el 13 del Decreto de concesión, lo derogó, tanto en lo que afectaba a la perpetuidad como a la libertad de tarifas de los riegos y abastecimiento de aguas a Valladolid.

»Considerando que por el Real decreto de concesión de 21 de abril de 1876, se otorgó a don Pedro Antonio Conteras autorización para construir el Canal del Duero, con una dotación de 4.200 litros de agua por segundo de tiempo, de los cuales 4.000 se destinarian al riego de una zona de 8.000 hectáreas de terreno, y los restantes 200 a abastecer de aguas potables a Valladolid, figurando entre las condiciones de la concesión la de que, según su clausura 13, se otorgaba a perpetuidad y con la libertad de tarifas o canon establecido en el Decreto-ley de 14 de noviembre de 1868.

»Considerando que por la ley de 15 de junio de 1882, en sus artículos 1.º, 2.º y 4.º se autorizó al Gobierno a dar a la Empresa del Canal de Valladolid, en cambio de la subvención indirecta que le otorgaba el Decreto de su concesión de 21 de abril de 1876, una directa del Estado que consistía en el 40 por 100 de todas las obras necesarias para el riego, quedando derogado el artículo 13 de aquél, en sustitución del cual se aplicarían a la concesión el 75 de la ley de Obras públicas y el 188 de la de Aguas, añadiéndose que el Gobierno fijaría, con arreglo a las leyes, las tarifas del canon que hubieren de satisfacer las tierras que tomen para su riego las aguas del Canal, que en ningún caso podría exceder de la cantidad necesaria para amortizar el capital invertido en las obras exclusivamente dedicadas al riego, y un interés de 4 por 100 sobre el mismo.

«Considerando que, en sentencia dictada por el Tribunal Supremo, con fecha 31 de mayo de 1911, en recurso interpuesto por la Sociedad Industrial Castellana contra la Real orden de 18 de enero de 1909 que imponía la aplicación del artículo 108 del Reglamento de 6 de julio de 1877 a la fijación de tarifas para el establecimiento, se declaró que no existiendo disposición que atribuya a la Administración, tanto central como municipal, derecho a fijar las tarifas con relación al abastecimiento de aguas de Valladolid, hay que atenerse a los mismos preceptos legales que regularon la concesión, los cuales suponen el derecho de la Compañía para fijar dichas tarifas; todo ello sin perjuicio del Gobierno y del Ayuntamiento a intervenir, en forma legal, para que se cumplan los fines de la concesión, como todos los relativos a policía, higiene y sanidad, y que refiriéndose la prescripción 13 exclusivamente al riego, no había lugar a resolver la pretensión de la demanda en orden a la perpetuidad de la concesión de aguas para el abastecimiento de Valladolid, por no haber sido esta cuestión tratada y resuelta en via gubernativa.

»Considerando que, por el artículo 75 de la ley general de Obras públicas de 13 de abril de 1877, las concesiones subvencionadas serán siempre temporales, no pudiendo exceder su duración de noventa y nueve años, transcurridos los cuales la obra pasará a ser propiedad del Estado, provincia o pueblo que hubiera suministrado la subvención.

»Considerando que por el artículo 188 de la ley de Aguas, las concesiones que se hicieren a Sociedades o Empresas para regar tierras ajenas